

## Acción Pública de Inconstitucionalidad Contra e artículo 8 Decreto Ley 415 de 1979

Miguel Angel Sánchez <misalar@gmail.com>

Jue 22/04/2021 9:31

**Para:** Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>

 5 archivos adjuntos (12 MB)

ANEXOS 1.pdf; ANEXOS 2.pdf; CEDULA DEMANANTE SANCHEZ LARA.pdf; ANEXOS.pdf; DEMANDA Decreto ley 415 de 1979.pdf;

Con el fin de dar trámite de acuerdo al proceso establecido para la Acción de Constitucionalidad, allego los siguientes documentos:

Escrito PDF Acción Pública de Inconstitucionalidad del artículo 8 Parcial Decreto Ley 415 de 1979, con presentación personal ante notaria.

Tres archivos PDF de anexos.

Atentamente.

Miguel Angel Sanchez Lara.

C.C. 79.244.096 de Bogotá.

[misalar@gmail.com](mailto:misalar@gmail.com)

3125626972

7  
Bogotá, 21 de abr. de 21

**HONORABLES MAGISTRADOS  
CORTE CONSTITUCIONAL  
Bogotá D.C.**

**Ref.: ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD  
Contra el Artículo 8 – Parcial del Decreto Ley 415 de 1979.**

MIGUEL ANGEL SANCHEZ LARA, ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., obrando en nombre propio, me dirijo a ustedes en uso de mis derechos y deberes consagrados en el numeral 6 del artículo 40 y en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución Política de 1991, con el fin de interponer la acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 8 – Parcial del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979, por cuanto contraría la Constitución Política en los artículos y aspectos que se indicarán y sustentarán a lo largo de este escrito.

**I. NORMA DEMANDADA:**

El artículo que se demanda parcialmente por vulnerar la Constitución Política de Colombia, es el artículo 8 del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979 referente a la prima de localización del Sena, específicamente en la parte que establece *"Esta prima se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente"*.

Subrayo a continuación el texto demandado dentro del artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979:

**"Artículo 8:** *La prima de localización constituye parte integral de la asignación básica mensual de los empleados del Sena. En consecuencia, los empleados públicos que prestan sus servicios en el centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento del Chocó y en la región de Urabá donde existen sedes permanentes del Sena, en los Departamentos del Cesar y la Guajira o en centros fijos de los Territorios Nacionales, percibirán un prima de Un mil quinientos pesos (\$1.500.00) mensuales, por concepto de ésta prestación. En ningún caso se podrá recibir viáticos y primas de localización simultáneamente. Esta prima se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente."*

**La norma demandada parcialmente es un Decreto con fuerza de Ley:**

Este Decreto Ley 415 de 1979 *"Por el cual se modifica la escala de remuneración de los empleos del Sena y se dictan otras disposiciones"*, fue expedido por el Presidente de la República *"en ejercicio de las facultades extraordinarias"* pro tempore, que le confirió el Legislador *"en la Ley 53 de 1978"*, como lo indica expresamente ese decreto en su parte inicial que subrayo, así:

**"DECRETO No. 415 DE 1979**

**(26 FEBRERO)**

*Por el cual se modifica la escala de remuneración de los empleos del Sena y se dictan otras disposiciones.*

**EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,**

*en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 53 de 1978,*

**DECRETA:**

**(...)"**

La Ley 53 de 1978 fue expedida a su vez por el Congreso de la República en virtud del artículo 76 – numeral 12 de la Constitución Nacional de 1.886 (vigente para el año 1978), que disponía:

**"Artículo 76.-** *Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:(...)*

*Revestir, pro tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen; (...)"*

La Corte Constitucional ha reiterado en varias sentencias, como la C-097 del 11 de febrero de 2003, que los decretos expedidos por el ejecutivo en virtud de las facultades "pro tempore" otorgadas por



el Legislador en virtud del artículo 76 - 12 de nuestra anterior Constitución, tienen fuerza de Ley, así:

*"la "legislación delegada", proferida en virtud de esa norma se había convertido "en un mecanismo corriente u ordinario para legislar sobre las materias que debían ser objeto de regulación por parte del Congreso de la República".*

## **II. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:**

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 241 de la Constitución Política vigente.

En varias sentencias la Corte Constitucional ha analizado y defendido su competencia en virtud de los numerales 4 y 5 del artículo 241 de nuestra actual Constitución, para conocer y decidir sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los decretos con fuerza de ley expedidos por el ejecutivo antes de la Constitución de 1991. Transcribo como ejemplo la Sentencia C-049 del 7 de febrero de 2012 que es diáfana y concluyente sobre este aspecto:

### **"4.1. Decretos con fuerza de ley expedidos con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991:**

4.1.1. La Constitución Política otorga competencia a la Corte Constitucional para decidir demandas de inconstitucionalidad contra decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno "con fundamento en los[el] artículo[s] 150 numeral 10...". En rigor, los decretos-leyes anteriores a 1991 se dictaban con apoyo en el artículo 76 numeral 12, la fuente constitucional entonces vigente para la habilitación legislativa del Ejecutivo mediante el otorgamiento de facultades extraordinarias precisas y pro tempore. Ante la hipótesis de inhibición para conocer de estos decretos con fuerza de ley por no fundamentarse en el artículo 150.10 constitucional vigente, la Corte Constitucional ha optado por reafirmar su competencia sucesivamente. Así:

4.1.1.1. En la sentencia C-189 de 1994 la Corte Constitucional adelantó el control constitucional de algunos artículos del Decreto 1900 de 1990 expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por la ley 72 de 1989<sup>111</sup>. La Corte señaló que la competencia para adelantar el control de constitucionalidad se deriva del numeral 5 del artículo 241 de la Constitución<sup>112</sup>, en tanto el Decreto había sido expedido en desarrollo de facultades extraordinarias al amparo de la Constitución de 1886 reformada.

4.1.1.2. En varias oportunidades se ha abordado el examen de constitucionalidad de disposiciones incorporadas al Decreto 1400 de 1970 mediante el cual el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades conferidas por la ley 4 de 1969, adoptó el Código de procedimiento Civil. La Corte ha destacado que su competencia se apoya en el numeral 5 del artículo 241 de la Constitución. Ese control también se ha dispuesto respecto de los cambios normativos que al estatuto procesal mencionado le fueron incorporados por el Decreto 2282 de 1989 expedido por el Presidente en ejercicio de las facultades conferidas por la ley 30 de 1987<sup>113</sup>.

4.1.1.3. En diversas ocasiones esta Corporación ha conocido de acciones públicas de inconstitucionalidad en contra del Decreto 100 de 1980 -Código Penal- expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por la ley 5 de 1979. Esta vez, la Corte se ha apoyado para fundamentar su competencia, en los numerales 4<sup>114</sup> y 5 del artículo 241 de la Constitución<sup>115</sup>.

4.1.1.4. Cabe destacar, que en la sentencia C-032 de 1997 citada, la Corte también abordó el examen del Decreto 1895 de 1989 adoptado por el Presidente de la República con fundamento en las facultades de Estado de Sitio previstas en el artículo 121 de la Constitución de 1886 reformada.

4.1.1.5. La Corte se ha declarado también competente, con fundamento en los numerales 4 y 5 del artículo 241 de la Constitución, para adelantar el control de constitucionalidad de las normas del Decreto 410 de 1971 que, con fundamento en las facultades otorgadas por la ley 16 de 1998, adoptó el Código de Comercio<sup>116</sup>.

4.1.1.6. En la sentencia C-061 de 2005 la este Tribunal examinó la constitucionalidad del artículo 112 del decreto 1213 de 1990, expedido en uso de las facultades extraordinarias conferidas en la ley 166 de 1989. En esa oportunidad, se declararon inexecutable algunos apartes de la disposición cuestionada. Y para fundamentar su competencia invocó el numeral 4 del artículo 241 dado que, según afirmó, se trata de una norma con rango legal. En idéntica dirección, al definir su competencia para adelantar el examen de constitucionalidad del parágrafo 2º del artículo 81 del Decreto 1212 de 1990 y del artículo 66 del Decreto 1213 de 1990, adoptados uno y otro en desarrollo de las facultades conferidas por la ley 166 de 1989, la Corte precisó que ella se derivaba del numeral 4 del artículo 241.

4.1.1.7. En la sentencia C-230A de 2008 la Corte examinó la constitucionalidad de diferentes disposiciones del decreto 2241 de 1986 por medio del cual se había adoptado el Código Electoral y cuya expedición presidencial se llevó a efecto con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República mediante la ley 96 de 1985. Advirtió que su competencia para adelantar tal examen se fundamentaba en el numeral 5 del artículo 241 de la Constitución.



4.1.2. Entonces, en materia del control constitucional de los decretos-leyes dictados por el Gobierno antes de la Constitución de 1991, puede apreciarse que: (i) la Corte, invariablemente, ha asumido competencia para decidir sobre su inconstitucionalidad, pese a no estar fundamentadas en el artículo 150.10 constitucional sino en el artículo 76.10 del orden constitucional derogado en 1991; (ii) también ha conocido de decretos legislativos de estados de excepción expedidos antes de la Constitución de 1991, no obstante se apoyen en los artículos 121 y 122 del ordenamiento constitucional anterior y no, como reza la Constitución vigente, en los artículos 212, 213 y 215<sup>12</sup>; (iii) en ocasiones la Corte ha basado su competencia en el numeral 5 del artículo 150 constitucional -en cuanto "decretos con fuerza de ley"- y en otras en el numeral 4 de la misma disposición -interpretando la expresión "leyes" en sentido material-."

### III. HECHOS:

Para contextualizar con precisión las normas Constitucionales que viola la norma demandada y sustentar posteriormente el fundamento y alcance de esa violación Constitucional, es necesario anotar primero los siguientes hechos:

1. El Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena es una institución de derecho público, correspondiente a la categoría de **establecimiento público del orden nacional** adscrito al Ministerio del Trabajo (artículo 1 de la Ley 119 de 1994).

2. Los empleados públicos del Sena tienen prestaciones sociales específicas para esa institución, de acuerdo con el Decreto Ley 1014 de 1978 *"Por el cual se fija el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos para los empleados públicos que desempeñan las funciones correspondientes a las distintas categorías de empleos del Sena, se fijan reglas para el reconocimiento de sus prestaciones sociales y se dictan otras disposiciones"*.

3. Una de esas prestaciones específicas para los empleados del Sena es la **Prima de localización**, que fue creada por el Artículo 20 del Decreto Ley 1014 del 15 de junio de 1978, adicionado posteriormente por el Artículo 8º del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979, así:

- Artículo 20 del Decreto Ley 1014 del 15 de junio de 1978: *"Los empleados públicos que prestan sus servicios en el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento del Chocó, y en la región de Urabá donde existen sedes permanentes del Sena, percibirán una prima de mil doscientos pesos (\$1.250.00) mensuales por concepto de ésta prestación. En ningún caso se podrán recibir viáticos y prima de localización simultáneamente. Apartar del 1º Enero de 1979, los empleados públicos que prestan sus servicios en los departamentos del Cesar y la Guajira o en Centros fijos de los Territorios Nacionales, recibirán ésta prestación."*
- Artículo 8 del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979: *"La prima de localización constituye parte integral de la asignación básica mensual de los empleados del Sena. En consecuencia, los empleados públicos que prestan sus servicios en el centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento del Chocó y en la región de Urabá donde existen sedes permanentes del Sena, en los Departamentos del Cesar y la Guajira o en centros fijos de los Territorios Nacionales, percibirán un prima de Un mil quinientos pesos (\$1.500.00) mensuales, por concepto de ésta prestación. En ningún caso se podrá recibir viáticos y primas de localización simultáneamente. Esta prima se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente."*

4. El Decreto Ley 415 de 1979 fue expedido por el ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias "pro tempore" que le otorgó el Legislador en la Ley 53 de 1978, de acuerdo con lo señalado por esa norma en su parte inicial.

5. Esta prima de localización del Sena se paga a los empleados de esa entidad única y exclusivamente por prestar sus servicios en Buenaventura, Barrancabermeja, Chocó, Región de Urabá, Cesar, La Guajira o en los antiguos Territorios Nacionales (Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada), como lo señalan expresamente los artículos 20 del Decreto Ley 1014 de 1978 y 8 del Decreto Ley 415 de 1979; es decir que el reconocimiento y pago de esta prima de localización no está ligada a la cantidad ni a la calidad del trabajo que realizan las personas que la reciben.

6. El valor de la prima de localización del Sena en el año 1978 fue de \$1.250 mensuales, como lo señala expresamente la norma que la creó (art. 20 del Decreto Ley 1014 de 1978), valor que para



ese año equivalía a **menos de la mitad de un (1) salario mínimo legal mensual**, como lo justificare posteriormente en este escrito.

7. El "Coordinador del Grupo Administración de Salarios" del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, emitió el 7 de octubre de 2020 la comunicación No. 9-2020-040553 respondiendo un derecho de petición sobre la prima de localización de esa institución, que anexo como prueba a esta demanda, en la cual suministra información sobre esa prima, su origen, las cifras oficiales que tiene el Sena sobre esa prestación, acompañado de una certificación y una presentación en PowerPoint elaborada por esa misma entidad.

8. De acuerdo con la información suministrada y certificada por el mismo Sena en los documentos emitidos por esa entidad que anexo como prueba a esta demanda, se pueden observar los siguientes hechos que dejan en evidencia la inconstitucionalidad de ajustar esa prestación con el 20% anual, y que sustentaré jurídicamente en posterior acápite de este escrito de demanda:

8.1. El Sena le paga la prima de localización a 1.214 empleados, de los cerca de 10.500 servidores públicos que tiene esa institución.

8.2. Desde el año 1980 hasta la fecha (2021), el Sena ha venido pagando la prima de localización con un reajuste del 20% anual en cada uno de esos años, con lo cual, esa prima entro en una etapa de crecimiento exponencial, desproporcionado e injusto, con los siguientes valores de referencia:

- En 1978 pagó \$1.250 mensuales.
- En 2020 pagó \$2.645.589 mensuales.
- **En 2030 pagará \$16.380.790 mensuales.**

8.3. Este incremento anual del 20% de la prima de localización ha generado un crecimiento injustificado, desproporcionado, injusto y exponencial de esa prestación, que viola la Constitución Política, ya que paso de valer \$1.250 en 1978, equivalentes a menos de la mitad de un (1) salario mínimo de ese año (como lo mencione en el hecho 6), a tener en el 2020 un valor de **\$2.645.589**, que equivalen a **más de tres (3) salarios mínimos legales mensuales** de ese año, y seguirá creciendo exponencialmente al punto que en tan solo nueve (9) años tendrá un valor de \$16.380.790 mensuales.

Nótese además, que ese valor tiene también incidencia en la liquidación y pago de todas las demás prestaciones sociales, ya que en virtud del artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979 la prima de localización forma parte de la asignación básica de los 1.214 empleados que la reciben, lo cual genera mayor desproporción y desigualdad en relación con los restantes empleados de la entidad que ocupan los mismos cargos en el resto del país.

La prima de localización del Sena pasó entonces de tener en 1978 (cuando fue creada) un valor equivalente a menos de medio (1/2) SMLMV, a tener en el año 2020 un valor superior a tres (3) SMLMV.

8.4. En 1978 la prima de localización equivalía a menos de la mitad de la asignación básica mensual del empleado de nivel y grado más bajo de la entidad, mientras que en el 2020 el empleado de más bajo nivel y grado de la entidad recibió más remuneración mensual por prima de localización que por la asignación básica mensual del decreto 362 de 2020.

8.5. En el 2020 un Auxiliar 01 del Sena con prima de localización recibió como asignación mensual **\$4.598.159** (\$1.952.570 de asignación básica del Decreto 362 de 2020 + \$2.645.589 de la prima de localización), mientras que un Auxiliar 01 del resto del país solamente recibió como asignación mensual **\$1.952.570**, realizando las mismas funciones y en muchos casos, con mayor cantidad de trabajo, por estar ubicados en las regionales grandes del Sena

8.6. Las cifras suministradas por el Sena en la diapositiva No. 14 del PowerPoint remitido por esa entidad (que anexo a esta demanda) titulada "COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE CARGOS", muestran también las desproporciones e injusticias generadas entre los niveles jerárquicos de la organización, por el ajuste de la prima de localización con el 20% anual que establece la norma demandada, y que rompen con el principio constitucional de que la remuneración debe ser proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, ya que por el monto de esa prima los empleados del nivel Asistencial (Auxiliares, Oficinistas y Secretarías) ubicados en sitios con prima de localización, tienen un salario mensual mayor al que tienen empleados de los niveles Profesional e Instructor del resto del país; los empleados del Nivel Técnico con prima de localización, tienen un salario mensual



mayor al que tienen empleados de los niveles Asesor y casi igual al de un Subdirector de Centro del nivel directivo en el resto del país, y empleados del nivel profesional con prima de localización tienen un salario mensual mayor al que tienen los Directores Regionales del nivel directivo en las Regionales más grandes del Sena donde no se paga esa prima.

**8.7.** Si lo anterior no resulta suficiente, la diapositiva No. 15 del PowerPoint remitido por el Sena (que anexo a esta demanda) titulada "COMPARATIVO DE COSTOS AUXILIAR 01 CON DIRECTOR GENERAL", deja en evidencia que de continuar incrementándose la prima de localización con el 20% anual, en tan solo 9 años, es decir, en el 2030, el Auxiliar 01 que reciba prima de localización (empleo de más bajo nivel y grado en el Sena), ganará una asignación básica mensual superior a la del DIRECTOR GENERAL del Sena, teniendo en cuenta (reitero) que por expresa disposición del texto inicial del artículo 8 del Decreto 415 de 1979 "*La prima de localización constituye parte integral de la asignación básica mensual de los empleados del Sena*".

Las cifras suministradas por el mismo Sena son concluyentes y hablan por sí solas: mientras que en el 2030 el **Director General del Sena** recibiría una asignación básica de **\$18.392.157** (con un incremento anual del 3%), el **Auxiliar 01** ubicado en los territorios con prima recibiría una asignación básica de **\$19.004.881**, discriminados así: \$2.624,091 de asignación básica incrementada anualmente con el mismo 3%, más (+) \$16.380.790 de prima de localización incrementada con el 20% anual.

Lo anterior implica que paulatinamente, cada año del 2021 al 2030, habrán empleados con prima de localización de los niveles Asesor, Profesional, Instructor, Técnico y Asistencial del Sena, que tendrán un salario mensual mayor al del Director General de esa institución, hasta que en el 2030 todos los 1.214 empleados que reciben esa prima tendrán una asignación mensual mayor que él.

**9.** El incremento injusto, desproporcionado, injustificado y exponencial de la prima de localización del Sena es contrario a la Constitución, desnaturaliza esa prestación social y genera graves consecuencia para el Sena que ponen en riesgo a esa entidad y por ende al "interés general", como lo demostraré en este escrito.

#### **IV. PRUEBAS:**

Como prueba de los hechos, las cifras y las proyecciones mencionadas en esta demanda, anexo los siguientes documentos emitidos directamente por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA:

- 1.** Respuesta del Sena a derecho de petición sobre prima de localización, correspondiente a la comunicación No. 9-2020-040553 emitida el 7 de octubre de 2020 por el "Coordinador del Grupo Administración de Salarios" del Sena (4 folios).
- 2.** Certificación expedida por el Sena de fecha 6 de octubre de 2020, enviada por esa entidad como anexo de la respuesta a la petición del numeral anterior (3 folios).
- 3.** Presentación en PowerPoint sobre la Prima de Localización, elaborada y remitida por el mismo Sena como anexo de la respuesta anotada en el numeral 1 de este aparte. (19 folios).

Estos documentos elaborados y enviados por el SENA contienen información oficial de esa entidad sobre la prima de localización, su origen y las cifras históricas, presentes y futuras que tiene esa institución sobre esa prestación. Con estos documentos emitidos directamente por esa entidad, la Corte Constitucional podrá corroborar el origen de la prima de localización del Sena, a la que se refiere la norma demandada parcialmente, la evolución histórica del valor que ha pagado esa entidad por ese concepto, la situación actual y las proyecciones de esa prestación salarial del Sena. Adicionalmente, como se trata de operaciones matemáticas, la Corte Constitucional también podrá confirmar la veracidad de esa información, y constatar la flagrante violación constitucional que está generando el reajuste de la prima de localización del Sena con el 20% anual, muy por encima de los porcentajes de variación del índice de precios al consumidor – IPC del país.

#### **V. FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN:**

Procedo a evidenciar en este acápite, que la parte demandada del Artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1978, que establece "*Esta prima*" de localización del Sena "*se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente*", viola los siguientes artículos:

- Artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política de 1991.
- Artículo 76 de la Constitución Nacional de 1886 (vigente para los años 1978 y 1979), específicamente sus numerales 9 y 12.



V.1. El incremento anual del 20% de la PRIMA DE LOCALIZACIÓN que establece el artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979 en la parte demandada, viola los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política en los apartes indicados a continuación.

Los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Nacional de 1991 establecen lo siguiente:

**"ARTÍCULO 1.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general".

**"ARTÍCULO 25.** El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas".

**"ARTÍCULO 53.** El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad".

5.1.1. Las normas constitucionales transcritas establecen en sus apartes subrayados principios básicos para el establecimiento y desarrollo de una sana relación entre empleadores y trabajadores o empleados, sin las cuales se generarían desequilibrios que afectarían a una de las partes o a los empleados entre sí, y que resultan ser inconstitucionales.

En un estado social de derecho, resulta fundamental entonces el respeto de la dignidad humana, el ejercicio del derecho al trabajo y la prevalencia del interés general, dentro del cual, los empleados o trabajadores deben desempeñar su trabajo en condiciones dignas y justas. En términos salariales y prestacionales, esa justicia se debe ver reflejada en una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo (art. 53 C. P.).

Sobre el valor y alcance de estos artículos constitucionales, la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia C-815 del 20 de octubre de 1999 lo siguiente:

*"La Corte halla que los argumentos de la accionante son razonables y ceñidos a la Constitución, y muy particularmente al concepto mismo del Estado Social de Derecho (Preámbulo y art. 1) y a la protección especial que, en la Carta, merece el trabajo (arts. 1, 25 y 53 C.P.), (...)*

*El artículo 25 de la Constitución expresa que el trabajo es un derecho y una obligación social y que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.*

*La misma norma proclama que toda persona tiene derecho a un trabajo en **condiciones dignas y justas** (...)*

*"La Corte Constitucional ha manifestado al respecto:*

*"Parte bien importante de la dignidad y justicia en medio de las cuales el Constituyente exige que se establezcan y permanezcan las relaciones laborales consiste en la proporcionalidad entre la remuneración que reciba el trabajador y la cantidad y calidad de su trabajo (artículo 53 C.P.)". (...)*

*Ahora bien, esa remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador, a su preparación, experiencia y conocimientos y al tiempo durante el cual vincule su potencia de trabajo a los fines que interesan al patrono".*

Al analizar la Corte Constitucional el incremento anual del salario, tanto en el sector público como en el sector privado, esa Corporación ha trazado pautas concretas en sentencias como las siguientes: T-102 de 1995, T-276 de 1.997, C-710 de 1.999, C-815 de 1.999, C-1433 de 2000, C- 1064 de



2001, C-551 de 2003, C-1017 de 2003, C-931/04 y C-911/12. Aunque la Corte Constitucional ha modulado su criterio a lo largo de esos años, en la "*ratio decidendi*" de esas sentencias ha precisado unos criterios que el ejecutivo debe tener en cuenta para incrementar anualmente el salario y las prestaciones de los servidores públicos, así como el salario mínimo del país, entre los cuales se sustraen los siguientes:

- **El incremento anual del salario tiene por objeto resguardar a los trabajadores del impacto negativo que tiene la inflación en sus ingresos laborales por la pérdida del poder adquisitivo:**

Al respecto, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-710 de 1.999, que declaró inexecutable segmentos del artículo 4º de la Ley 4ª de 1992, lo siguiente:

*"A juicio de la Corte, que se estipule en la ley marco, a manera de directriz y regla vinculante, que, como mínimo, cada año se producirá al menos un aumento general de salarios para los empleados en mención, es algo que encaja perfectamente dentro del cometido y papel atribuidos por la Constitución y la jurisprudencia al Congreso Nacional en estas materias. Es decir, el Congreso no vulnera la aludida distribución de competencias, sino que, por el contrario, responde a ella cabalmente, cuando **señala un tiempo máximo de vigencia de cada régimen salarial, que debe ir en aumento, al menos año por año, con el fin de resguardar a los trabajadores del negativo impacto que en sus ingresos laborales producen la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida en una economía inflacionaria**".*

- **El referente para el incremento anual de los salarios debe ser la inflación causada durante el año anterior.**

Al declarar condicionadamente executable el artículo 8 de la ley 278 de 1996 la Corte Constitucional manifestó lo siguiente en la Sentencia C-815 de 1.999:

*"Más aún, la Corte coincide con lo expuesto por el Procurador General de la Nación en el sentido de que el Gobierno, en la hipótesis de la norma, debe ponderar los factores contenidos en ella, pero que, **en todo caso el reajuste salarial que decreta nunca podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira**. Y ello por cuanto, como el Ministerio Público lo dice, **el Gobierno está obligado a velar porque el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen. De lo contrario, vulnera el artículo 53 de la Constitución**".*

En la Sentencia C-1433 de 2000 la Corte señaló al respecto que:

*"(...) Por esta razón, la remuneración debe asegurar un mínimo vital, como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corte y, además, ser móvil, de modo que siempre guarde equivalencia con el precio del trabajo. // Esta equivalencia debe ser real y permanente, y conseguirla supone necesariamente **mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo, y asegurar que aquél en términos reales conserve su valor**".*

*Así mismo, con arreglo a la jurisprudencia contenida en la sentencia C-815/99, los aumentos salariales deben corresponder, por lo menos al monto de la inflación del año anterior, porque sólo de esta manera se cumple a cabalidad con los mandatos constitucionales que exigen conservar el poder real de los salarios de los trabajadores.*

Posteriormente, en la Sentencia C-931 de 2004, al señalar los criterios que se deben tener en cuenta para determinar el incremento salarial de cada año, la Corte indicó que uno de esos criterios es:

*"... (ii) en principio, el derecho de estos servidores al reajuste anual implica que el aumento de su salario mantenga su poder adquisitivo real, por lo cual **el criterio de reajuste debe ser el del índice de inflación**. ..."*

- **Uno es el ajuste anual del salario por inflación, y otro el reajuste o incremento salarial:**



En la Sentencia C-1433 de 2.000 la Corte Constitucional aclaró que los ajustes anuales no comportan un incremento del salario, sino un ajuste de valor por la inflación, así:

*"2.6. (...) la remuneración debe asegurar un mínimo vital, como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corte y, además, ser móvil, de modo que siempre guarde equivalencia con el precio del trabajo.*

*Esta equivalencia debe ser real y permanente, y conseguirla supone necesariamente mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo, y asegurar que aquél en términos reales conserve su valor.*

*Estima la Corte que el ajuste del salario, desde la perspectiva señalada, no corresponde propiamente a su incremento, pues, para que exista un incremento en la remuneración, verdadero y efectivo, se requiere que ésta se revise y modifique, aumentándola, luego del ajuste por inflación, teniendo en cuenta los factores reales de carácter socioeconómico que inciden en su determinación y, especialmente, la necesidad de asegurar el mínimo vital y la equivalencia con lo que corresponde al valor del trabajo.*

*El segundo corolario es que si la calidad y cantidad de trabajo realizado por una persona aumentan, ésta tiene derecho a un aumento de su remuneración, proporcional al incremento del trabajo".*

De acuerdo con este criterio de la Corte, el ajuste anual de los salarios y prestaciones tiene por objeto principal mantener de manera real y permanente la proporción que debe existir entre el trabajo que hace la persona y lo que se le paga por eso (salario), teniendo en cuenta factores exógenos como la inflación, que le resta poder adquisitivo a los ingresos.

**5.1.2. Razones por las que el incremento de la prima de localización del Sena con el 20% anual viola los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política y los criterios de la Corte Constitucional anotados anteriormente:**

El artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979 establece expresamente en la parte demandada de su artículo 8, que la prima de localización del Sena "se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente".

Con base en esta norma, el Sena ha ajustado desde el año 1979 hasta la fecha (2021) la prima de localización con el 20%, en una aplicación literal de ese artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979.

Ese incremento de la prima de localización del Sena con el 20% anual que ordena la norma demandada ha generado desigualdades e injusticias que se evidencian en la respuesta al derecho de petición suministrada por el mismo Sena, que anexo como prueba.

De la información enviada por el Sena en esos documentos, específicamente en las diapositivas 4 y 5 de la presentación de PowerPoint de esa entidad, denominadas "COMPARATIVO DECRETO 145/79 VS CALCULOS CON % IPC", y que son fácilmente verificables por la Corte Constitucional mediante operaciones matemáticas, se observa que entre los años 1979 a 1998 el IPC acumulado anual de Colombia fue de dos dígitos, y estuvo siempre por encima del 16%, siendo su año más alto en 1990, cuando el IPC fue del 32,36%, pero de otro lado, desde el año 1999 hasta la fecha, el IPC ha sido solamente de un dígito, y ha descendió sustancialmente, siendo el año más bajo el 2009 con el 2%.

Por lo anterior, entre los años 1980 a 2003, los empleados del Sena con derecho a la prima de localización, recibieron cada uno de esos años por ese concepto, un valor inferior al que debieron recibir teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y prestaciones, por el IPC acumulado anualmente en Colombia.

A partir del año 2004, los empleados del Sena con derecho a prima de localización han venido recibiendo un valor mayor por ese concepto, al que tienen derecho a recibir teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y prestaciones por el IPC en Colombia, y por ser ese incremento acumulado año por año, el crecimiento desproporcionado de esa prima es exponencial y exagerado, al punto de que en tan solo 9 años el Sena le tendría que pagar a los 1.214 empleados \$16.380.790 mensuales por prima de localización, más el factor prestacional de esa prima.

Para evidenciar la **"desproporción"** actual de la prima de localización, debemos tener en cuenta que en su origen (a través del Decreto Ley 1014 de 1978) esa prima equivalía a **menos de la mitad de un salario mínimo mensual**, mientras que en el 2020 esa prima equivale a **más de**



tres salarios mínimos mensuales, y cada año seguirá creciendo exponencialmente esa diferencia, por el incremento acumulado del 20% anual de la prima de localización del Sena, frente al incremento anual de un dígito del salario mínimo en Colombia.

Como respaldo de lo anterior, téngase en cuenta que el artículo 20 del Decreto Ley 1014 de 1978 estableció que la prima de localización del Sena tenía un valor original de **\$1.250** mensuales, y como el salario mínimo de 1978 fue de \$2.580 de acuerdo con el Decreto 2371 de 1977, esa prima equivalía al **48,45%** de un (1) SMLMV de 1978. Para el año 2020, de acuerdo con la información certificada por el Sena en la respuesta al derecho de petición, esa institución pagó por concepto de prima de localización **\$2.645.589** mensuales (en virtud del incremento del 20% anual que establece la norma demandada parcialmente); como para el 2020 el SMLMV fue de \$877.803 en virtud del Decreto 2360 de 2019, el valor de la prima de localización fue el equivale al **301,38%** de un (1) SMLMV.

Otra referencia fácilmente verificable que muestra la Inconstitucional desproporción del crecimiento de la prima de localización del Sena se encuentra al comparar el valor de esa prima frente al salario de los empleados de la entidad. Por ejemplo, en el artículo 8 del Decreto Ley 1014 de 1978 se observa que el empleado del nivel y grado más bajo del Sena tenía para ese año una asignación básica de \$2.940, mientras que la prima de localización creada en el artículo 20 de ese decreto era de \$1.250; es decir que la prima de localización de ese empleado en 1978 equivalía a menos de la mitad de su asignación básica, exactamente al **42,5%**; en el 2020 el artículo 2 del Decreto 362 de 2020 muestra que el empleado del nivel y grado más bajo del Sena recibió ese año \$1.952.570, mientras que la prima de localización fue de \$2.645.589 mensuales, lo cual evidencia que actualmente esos empleados ganan más por prima de localización, que por la asignación básica, exactamente el 135,5%.

Este hecho está generando en el Sena unas **"Injusticias y desproporciones"** que violan el artículo 53 de la Constitución Política, ya que mientras esta norma superior pregonaba que la remuneración debe ser "proporcional a la cantidad y calidad de trabajo", en el Sena ocurre lo contrario por el incremento anual de esa prima con el 20% entre los empleados que ocupan los mismos cargos, veamos:

Un Auxiliar 01 que presta sus servicios en un lugar con prima de localización recibió en el 2020 por asignación básica \$4.598.159 mensuales (\$1.952.570 de asignación del Decreto 362 de 2020 + \$2.645.589 de la prima de localización), un Auxiliar 01 que presta sus servicios en el resto del país con las mismas funciones recibió una asignación básica mensual de solo \$1.952.570 en virtud del Decreto 362 de 2020. Es decir que en el 2020 el Auxiliar 01 ubicado en territorios con prima de localización ganó más del doble del Auxiliar 01 ubicado en el resto del país, por realizar las mismas funciones y cumplir los mismos requisitos para el desempeño, y no por la calidad y cantidad de trabajo, sino única y exclusivamente por el incremento del 20% anual de la prima de localización que establece el artículo demandado parcialmente. Nótese incluso, que la prima de localización está asignada para ciudades, departamentos o lugares pequeños, con menor demanda de servicios del Sena, mientras que departamentos grandes (con mayor población y economía) que tienen alta demanda de servicios de esa entidad no la tienen asignada.

La desproporción e injusticia que se genera entre empleados con cargos iguales en el Sena por la prima de localización, es mucho más grande si tenemos en cuenta el impacto salarial que tiene esa prima en la liquidación de las demás prestaciones sociales, porque la parte inicial del artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1978 dispone que la prima de localización *"constituye parte integral de la asignación básica mensual de los empleados del Sena"*.

Adicionalmente, en la información suministrada por el Sena en respuesta al derecho de petición sobre el tema, se observa en la diapositiva No. 14 del PowerPoint remitido por esa entidad, titulado "COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE CARGOS", una serie de **"Injusticias y desproporciones laborales"** que ya se generaron entre empleos pertenecientes a diferentes niveles ocupacionales del Sena por el ajuste de la prima de localización con el 20% anual que establece la norma demandada, toda vez que empleados del nivel Asistencial (Auxiliares, Oficinistas y Secretarías) ubicados en sitios con prima de localización, tienen un salario mensual mayor al que tienen empleados de los niveles Profesional e Instructor ubicados en el resto del país; los empleados del Nivel Técnico ubicados en sitios con prima de localización, tienen un salario mensual mayor al que tienen empleados de los niveles Asesor y casi igual al de un Subdirector de Centro del nivel directivo en el resto del país, y empleados del nivel profesional ubicados en esos sitios con prima de localización, tienen un salario mensual mayor al que tienen los Directores de las Regionales más grandes del SENA en el resto del país.



Así, una prima de localización que en su origen se estableció como una parte pequeña de la asignación básica del cargo, para quienes laboraran en esos territorios que para el año 1978 eran aislados, alejados e incommunicados, se convierte hoy en factor de injusticia laboral en la entidad, y desproporción frente a las responsabilidades y los requisitos necesarios para el desempeño de los empleos, vulnerando el artículo 53 de la Constitución Política que exige una **"remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo"**.

Pero como la prima de localización de los 1.214 empleados del Sena seguiría incrementándose anualmente con el 20% (si no se declarara su Inconstitucionalidad), mientras que los salarios de los restantes 9.200 empleados de la entidad se continuarán incrementando solamente con el 3, 4 o 5 %, la injusticia y la desproporción seguirá aumentando exponencialmente, al punto que en menos de 10 años TODOS los 1.214 empleados que reciben esa prima tendrán un sueldo mensual mayor al del Director General del SENA, como lo muestra el mismo Sena en la proyección hecha en su diapositiva No. 15 del PowerPoint anexo a esta demanda, titulada ***"COMPARATIVO DE COSTOS AUXILIAR 01 CON DIRECTOR GENERAL"***.

Las consecuencias del incremento de la prima de localización del Sena con el 20% anual no son solo "injustas y desproporcionadas", y en consecuencia violatorios de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, sino que ponen en peligro el futuro del Sena, lo cual viola también el artículo 1 ibidem, por cuanto el Sena es una entidad crucial para el equilibrio social del país, la generación de capacidades para el trabajo y la productividad de las empresas.

Es necesario preguntarse aquí, si **¿es viable una entidad pública en la que 1.214 empleados ganen más que el Director General de la institución** solo por prestar sus servicios desde unos territorios del país, aunque tengan menos responsabilidades y menos requisitos de desempeño?. Si la respuesta a esta pregunta es que no es viable, entonces el artículo demandado parcialmente también viola el interés general que debe prevalecer en virtud del artículo 1 de nuestra Carta Magna, porque por mantener un privilegio injusto y desproporcionado a 1.214 empleados del Sena, se pone en riesgo el servicio que esa entidad le presta a todo el país.

El incremento de la prima de localización con el 20% anual es muy superior a los índices de inflación que tiene Colombia desde el año 1999, por lo cual, al aplicar en estos momentos ese porcentaje del 20% no se está protegiendo esa prestación de la pérdida del poder adquisitivo que genera la inflación, sino que se está incrementando su valor de manera desproporcionada e injustificada, en contravía de la intención que tuvo el Gobierno Nacional al crear esta prima de localización en 1978, y de lo establecido por los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.

No existen en este caso factores endógenos de la relación laboral del Sena con los empleados ubicados en esos territorios con prima de localización, que ameriten una diferencia salarial tan grande, porque no ha variado la calidad ni la cantidad de trabajo que realizan las personas en esos territorios frente a la cantidad y calidad de trabajo que realizan los empleados de la entidad en el resto del país; por el contrario, la cantidad de trabajo es mayor en los empleados que laboran en las Regionales grandes del Sena (Distrito Capital, Antioquia, Atlántico, Santander y Valle), por la cobertura que tienen, sin embargo en estos territorios no hay prima de localización.

La prima de localización, por formar parte de la asignación básica mensual, afecta gravemente el equilibrio que debe existir según la Corte Constitucional entre las funciones, las responsabilidades del cargo, los requisitos y el salario.

Así las cosas, el incremento de la prima de localización del Sena con el 20% anual que establece la norma demandada, viola los artículos 25 y 53 de la Constitución Política que exigen una remuneración justa y proporcional para el trabajador, que sea acorde con la cantidad y calidad del trabajo, pero además, pone en riesgo el futuro del Sena, con lo cual también se viola el artículo 1º de la Carta Superior, porque se está privilegiando a 1.214 empleados de esa entidad, por encima del interés general.

**V.2. El artículo 8 del Decreto 415 de 1979, demandado parcialmente, violó el artículo 76 de la Constitución Nacional que estaba vigente para los años 1978 y 1979, específicamente sus numerales 9 y 12:**

Con el artículo 8 del Decreto 415 de 1979 que se demanda parcialmente, el ejecutivo excediendo las facultades precisas que le había otorgado el Legislador en la Ley 53 de 1978, lo cual vulnera el artículo 76 de la Constitución Política de 1986 que regía en el año 1978, en los siguientes apartes:



**"Artículo 76.-** Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:

(...)

(9) "fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales"

(...)

(12) Revestir, pro tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen;

(...)"

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la naturaleza especialísima de las facultades "pro tempore" estaba condicionada por dos requisitos fundamentales: el primero, que las facultades otorgadas no podían ser generales, sino que debían estar identificadas y limitadas, razón por la cual el ejecutivo solamente podía expedir normas relacionadas con esas materia, y el segundo, el límite temporal.

En la Sentencia C-097 del 11 de febrero de 2003 esa corporación precisó al respecto en su numeral 4.2 que:

"El Constituyente de 1991 quiso enfrentar el abuso consistente en la atribución recurrente y generalizado de las funciones legislativas al Gobierno mediante la institución de las facultades extraordinarias. (...). Al respecto ha sostenido la Corporación, desde el primer año de ejercicio de sus funciones:

"La Constitución Política de 1886 concedía en su artículo 76 numeral 12 al Congreso de la República la atribución de "Revestir, pro tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen". Dos elementos venían a conformar la naturaleza de la institución denominada de las "facultades extraordinarias" que allí se consagraba, el uno, concerniente a la temporalidad de la delegación, según el cual la ley habilitante debía fijar un término para su desarrollo, de suerte que, éste debía producirse antes de su vencimiento. Término cuya duración no tenía límites en aquel texto constitucional, sin perjuicio de que no se permitían facultades extraordinarias con un carácter permanente. El otro elemento, concerniente a la determinación clara de las materias que podían ser objeto de desarrollo por el jefe de la rama ejecutiva del poder público, quien tenía unos límites precisos para adelantar su trabajo legislativo, de manera que sólo podía ocuparse de la regulación de los asuntos que le señalara la ley de facultades. Por su parte, ésta ley debía señalar de manera precisa el alcance de las facultades, no pudiendo expedirse para trasladar al presidente facultades legislativas genéricas".

En la Sentencia C-049 del 7 de febrero de 2012 la Corte reiteró que:

"En rigor, los decretos-leyes anteriores a 1991 se dictaban con apoyo en el artículo 76 numeral 12, la fuente constitucional entonces vigente para la habilitación legislativa del Ejecutivo mediante el otorgamiento de facultades extraordinarias precisas y pro tempore".

Respecto a las materias precisas en las que el Legislador le concedió facultades al ejecutivo para expedir normas en la Ley 53 de 1978, el artículo 1º de esa ley dispuso:

**"Artículo 1º.** De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de sesenta días calendario, contados a partir de la vigencia de esta Ley, para los siguientes efectos:

1. Fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de los empleos de:

a) La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, incluidas las unidades administrativas especiales;

b) La Registraduría Nacional del Estado Civil;

c) La Corte Electoral;

d) La Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público, incluidas las Direcciones de Instrucción Criminal;

e) El Tribunal Disciplinario;

f) La Contraloría General de la República.

2. Fijar las escalas de remuneración de los empleos públicos pertenecientes a las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas.



3. Fijar los sueldos básicos mensuales de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, de los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, y del personal civil al servicio del Ramo de la Defensa Nacional.

4. Señalar las bonificaciones mensuales de Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes, Soldados y alumnos de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional".

Con base en esta norma podemos decir que siendo el Sena un establecimiento público perteneciente a la rama ejecutiva del orden nacional, el Legislador le otorgó en esa ley al ejecutivo facultades pro tempore para "Fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de los empleos" en esta entidad.

Significa lo anterior que el Legislador no le concedió al ejecutivo en la Ley 53 de 1978 facultades para modificar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden nacional, incluidos los empleados del SENA.

La diferencia en el sector público Colombiano entre "la escala de remuneración" y el "régimen salarial y prestacional", ha sido analizado por la misma Corte Constitucional en sentencias como la C-402 del 3 de julio de 2013, en la cual dijo:

*"3.1. En relación con el primer aspecto, la Corte encuentra que el Decreto 1042/78 fue adoptado al amparo de la Constitución anterior. En dicha normativa, se disponía, en su versión posterior a la reforma de 1968, que al Congreso le competía, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 76, "fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales".*

De acuerdo con el texto subrayado de la Constitución, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que una es la escala de remuneración de los empleos y otro el régimen salarial y prestacional que tienen los servidores públicos, ya que si se tratara de lo mismo, hubiera sobrado la expresión del numeral 9 del artículo 76 superior que decía: "así como el régimen de sus prestaciones sociales".

En la misma sentencia C-402 de 2013 la Corte Constitucional graficó de manera precisa la diferencia entre las dos para las entidades territoriales, así:

*"...cabe destacar que la facultad de fijar el régimen de salarios de los servidores públicos corresponde al Congreso y al Presidente de la República, en la forma ya enunciada. A partir de esa fijación, procede la intervención de los concejos municipales y las asambleas departamentales, por mandato de los artículos 313-6 y 300-7 superiores, respectivamente, y en forma complementaria (sic), con el fin de adoptar en esas secciones del territorio la política de salarios. Efectivamente, con base en el máximo salarial previamente delimitado por el gobierno nacional, los alcaldes y los gobernadores señalan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, en lo que se ha denominado un proceso de definición armónica entre las distintas autoridades que intervienen en el mismo. En cambio, respecto del régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos territoriales, la competencia es indelegable en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas, por expresa prohibición constitucional".*

En el caso analizado, la distinción entre "escala de remuneración" y "régimen salarial y prestacional", también aplica para el sector público nacional, como se evidencia en el Decreto 1042 de 1978, aplicable al Sena, en cuyos artículos 12 a 20 desarrolla el tema de las escalas de remuneración de los empleos, indicando lo siguiente:

*"ARTÍCULO 12. De la nomenclatura y remuneración de los niveles. A cada uno de los niveles de que tratan los artículos anteriores corresponden una nomenclatura específica de empleos y una escala de remuneración independiente".*

A partir del texto subrayado, el mismo Decreto precisa en los artículos 14 al 20 cuál es la escala de remuneración que le corresponde a cada uno de los niveles ocupacionales, destinando un artículo para cada nivel.

De acuerdo con esto, no es procedente asimilar constitucional ni legalmente las escalas de remuneración de los empleos, con el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, ya que no es acertado concluir que cada nivel ocupacional tiene un régimen salarial y prestacional



independiente, como si ocurre con la escala de remuneración, de acuerdo con la norma vigente para los años 1978 y 1979.

En consecuencia, si el numeral 9 del artículo 76 de la Constitución Nacional vigente para 1978 y las normas del sector público que regulan el tema para entonces, hablaban de las escalas de remuneración como un tema específico y con alcances diferentes a los del régimen salarial y prestacional de los empleados, el ejecutivo excedió con el artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979 las facultades que le confirió el legislador en la Ley 53 de 1978, al modificar una "prima", que forma parte del régimen salarial y prestacional de los empleados del Sena, ya que solo podía en virtud de la Ley 53 de 1978 "Fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de los empleos de // a) La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional,"

Sin duda, las "PRIMAS" en el derecho Colombiano forman parte del régimen prestacional, ya sea que tengan o no implicaciones salariales, llámese prima de navidad, prima de servicios, prima de antigüedad, etc. Incluso, es viable legalmente que una misma "prima" sea y no sea salarial, dependiendo de su origen, como ocurre con la prima técnica, que si se otorga por estudios y experiencia es salarial, pero si es por evaluación del desempeño no es salarial (Decreto Ley 1661 de 1991).

En el caso de la PRIMA DE LOCALIZACION en análisis, puede evidenciar la Corte Constitucional que fue creada o nació a la vida jurídica con el artículo 20 del Decreto Ley 1014 de 1978 como una prestación para los empleados del Sena ubicados en las zonas que señala esa norma, sin fijar un incremento anual fijo, con lo cual era entendible que el incremento anual de esa prima de localización era el mismo con el que se incrementara los demás salarios y prestaciones de la entidad, pero al señalar el artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1978 un incremento anual fijo del 20% para esa prima, excedió la Ley 53 de 1978, de facultades "pro tempore", la cual no incluía la posibilidad de modificar el régimen salarial y prestacional de las entidades públicas, entre ellas el del SENA.

Por lo anterior, sólo por haber expedido el ejecutivo la parte demandada del artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1978 excediendo las facultades otorgadas por el Legislador en la Ley 53 de 1978, es inconstitucional y debe ser declarado inexecutable la parte final de esa norma que establece: "Esta prima se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente."

**VI. La prima de Localización del Sena no genera derechos adquiridos y debe ajustarse a su valor real.**

Por disposición de la Constitución Política:

**"ARTÍCULO 58.** Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. (...)"

De acuerdo con esta norma, el principio constitucional en nuestro sistema de derecho es que la Ley, y de contera los Jueces de la República, deben garantizar, respetar y proteger los derechos que hayan sido adquiridos por los ciudadanos de conformidad con nuestro sistema legal.

Al respecto la Corte Constitucional señaló en la Sentencia T-336 de 1997 y en la Sentencia C-672 de 2001 que cuando "existe un vicio [...] no puede permanecer sustentando un derecho, como si éste se hubiese adquirido al amparo de la ley", y que "En estos escenarios realmente no puede hablarse de derechos subjetivos que merezcan protección constitucional, pues nunca lo ilícito genera derechos".

En múltiples sentencias de la Corte Constitucional, que están recapituladas en la sentencia SU- 182 del 8 de mayo de 2019, esa corporación reiteró también que:

"son dignos de protección sólo aquellos derechos que han sido adquiridos con justo título" (...) que "se hubiesen adquirido al amparo de la ley".

En la misma traza de este principio constitucional, la Ley 4ª de 1992 dispone lo siguiente sobre los salarios y prestaciones del sector público:

**"ARTÍCULO 10.-** Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno



*Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos".*

De acuerdo con este artículo, todo régimen salarial que se establezca contraviniendo las disposiciones constitucionales y las que señala esa Ley 4ª de 1992 CARECE DE TODO EFECTO Y NO CREA DERECHOS ADQUIRIDOS.

Comprobado entonces como está en el caso demandado, que el texto acusado del artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1979 fue expedido violando el artículo 76 de la Constitución Nacional que estaba vigente para los años 1978 y 1979, específicamente sus numerales 9 y 12, y que viola además los artículos 1, 25 y 53 de la actual Constitución Política de Colombia, debe concluirse necesariamente que de conformidad con lo anotado anteriormente, el ajuste del 20% anual que establece la norma demanda y que viene aplicando el Sena literalmente hasta la fecha, es inconstitucional e ilegal, y no puede generar derechos adquiridos para los empleados del Sena que desempeñan sus funciones en los sitios que establece la norma.

En consecuencia, con el fin de restablecer la constitucionalidad y legalidad del reconocimiento y pago de la prima de localización del Sena, resulta necesario que la Corte Constitucional ordene al Sena empezar a pagar el valor justo y proporcional de la prima de localización de acuerdo con la voluntad del Decreto Ley 1014 de 1978 en su artículo 20, es decir, ajustando anualmente el valor de la prima establecida en esa norma con el IPC de cada año, y empezar a pagar ese nuevo valor real a quienes tengan derecho a recibirla desde la ejecutoria de la sentencia que lo ordene.

Respecto a los valores de la prima de localización que ya recibieron los empleados del Sena, no puede exigírseles la devolución en virtud del principio de buena fe.

#### **VII. PRETENSIONES:**

Con base en todo lo anotado, de manera atenta solicito a la Honorable Corte Constitucional restablecer la constitucionalidad de la prima de localización que paga el Sena a sus empleados, y en consecuencia:

1. Declarar inexecutable parcialmente el artículo 8 del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979 *"Por el cual se modifica la escala de remuneración de los empleos del Sena y se dictan otras disposiciones"*, en la parte que establece *"Esta prima se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente"*.

2. Con el fin de restablecer la constitucionalidad de la liquidación y pago de la prima de localización del Sena, ordenar a esa entidad:

2.1. Calcular nuevamente el valor actual de la prima de localización del Sena, reajustando el valor establecido por el artículo 20 del Decreto Ley 1014 de 1978 con el IPC de cada año, o con el mecanismo de actualización de valor que defina esta Corporación dentro del marco constitucional y legal vigente.

2.2. Empezar a pagar ese nuevo valor de la prima de localización desde la ejecutoria de la sentencia, a quienes tengan derecho a recibirla.


#### **VIII. NOTIFICACIONES**

El accionante recibirá notificaciones en:

Dirección: Carrera 7 No 17-01 Oficina 729. Bogotá.  
Correo electrónico: misalar@gmail.com  
Teléfono: 3125626972

De los honorables Magistrados,

Atentamente:

Firma:   
Nombre: Miguel Ángel García Lara  
C. de C. No. 29.244.056.56...

Anexos: Documentos anunciados en el acápite de "Pruebas" en este escrito de demanda (26 folios)



**El anterior escrito dirigido a: Interesado**

**NOTARIA 14**  
**DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**

**POR: SANCHEZ LARA MIGUEL ANGEL**

Identificado con: **C.C. 79244096**

Y.T.P.

www.notariaenlinea.com Bogotá, 21/04/2021 a las 02:17:09 p.m.

**Y6B8CQ2SUHQ\$40YC**

Incorrectly:ecd

**FIRMA DECLARANTE**

**DACI**

**CONSEJO NOTARIAL TRIANA**  
**NOTARIA 14 DE BILBAO ENCARGADA**

## Huella

ajo a continuación el texto demandado dentro del artículo 8 del Decreto Ley 415 de 1973:





El empleo  
es de todos

Mintrabajo

# PRIMA DE LOCALIZACION SENA



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



## Decreto 1014 del 15 de junio de 1978



**“Artículo 20.** Los empleados públicos que prestan sus servicios en el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento del Chocó, y en la región de Urabá donde existen sedes permanentes del SENA, percibirán una prima de mil doscientos cincuenta pesos **(\$1.250.00) mensuales** por concepto de ésta prestación. En ningún caso se podrán recibir viáticos y prima de localización simultáneamente.

## Decreto 415 del 26 de febrero de 1979:

**“Artículo 8:** La prima de localización constituye parte integral de la asignación básica mensual de los empleados del Sena. En consecuencia, los empleados públicos que prestan sus servicios en el centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento del Chocó y en la región de Urabá donde existen sedes permanentes del SENA, en los Departamentos del Cesar y la Guajira o en centros fijos de los Territorios Nacionales, percibirán un prima de Un mil quinientos pesos **(\$1.500.00) mensuales**, por concepto de ésta prestación. En ningún caso se podrá recibir viáticos y primas de localización simultáneamente. **Esta prima se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente.”**



RESUMEN HISTORICO	
I.P.C.	
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	
COLOMBIA	
AÑO	IPC
1967	7,90
1968	6,46
1969	8,90
1970	7,06
1971	12,84
1972	13,53
1973	22,49
1974	25,00
1975	17,52
1976	25,60
1977	27,45
1978	19,75
1979	28,81
1980	25,96

Promedio 1970 a 1978 = **19,2**

- ❑ Desde 1.999 (9,23%) hasta el 2019 (3,8%) el IPC ha sido de 1 dígito.
- ❑ SMLMV 1978: **\$2.580** (Dto 2371 de 1.977)  
PL **\$1.250** = **48,45%** de 1 SMLMV
- ❑ SMLMV 2020: \$ **877.803** (Dto 2360 de 2019)  
x 48,45% = **\$425.295**
- ❑ PL 2020 con 20%: **\$2.645.589**











## PROYECCION INCREMENTO PRIMA DE LOCALIZACION CON EL 20% ANUAL

2020	<b>2.645.589</b>
2021	<b>3.174.708</b>
2022	<b>3.809.650</b>
2023	<b>4.571.580</b>
2024	<b>5.485.895</b>
2025	<b>6.583.075</b>
2026	<b>7.899.689</b>
2027	<b>9.479.627</b>
2028	<b>11.375.553</b>
2029	<b>13.650.663</b>



## *SERVIDORES PUBLICOS CON PRIMA DE LOCALIZACION*

NIVEL	No DE CARGOS
ASISTENCIAL	59
DIRECTIVO	21
INSTRUCTOR	786
PROFESIONAL	231
TECNICO	115
TRAB. OFICIAL *	2
Total General	<b>1.214</b>

## PROYECCION PRIMA DE LOCALIZACION AÑO 2020

NIVEL	No DE CARGOS	VALOR PRIMA DE LOCALIZACION	VALOR FACTOR PRESTACIONAL	TOTAL ANUAL PRIMA DE LOCALIZACION
ASISTENCIAL	59	1.751.204.207	1.183.776.116	2.934.980.324
DIRECTIVO	21	624.623.799	427.489.480	1.052.113.279
INSTRUCTOR	786	23.320.611.291	15.913.479.779	39.234.091.070
PROFESIONAL	231	6.862.925.019	4.667.436.026	11.530.361.045
TECNICO	115	3.417.308.603	2.350.234.839	5.767.543.442
TRAB. OFIC.	2	50.423.500	30.053.030	80.476.530





# PROYECCION PRIMA DE LOCALIZACION SENA 2020 A 2029

AÑO	VALOR PRIMA DE LOCALIZACION	No DE CARGOS	VALOR PRIMA DE LOCALIZACION	VALOR FACTOR PRESTACIONAL	TOTAL ANUAL PRIMA DE LOCALIZACION
2.02 0	2.645.589	1214	36.036.110.508	24.582.370.114	<b>60.618.480.622</b>
2.02 1	3.174.708	1214	43.383.025.220	29.498.832.637	<b>72.881.857.857</b>
2.02 2	3.809.650	1214	52.031.691.742	35.398.599.164	<b>87.430.290.906</b>
2.02 3	4.571.580	1214	62.410.091.568	42.478.318.997	<b>104.888.410.566</b>
2.02 4	5.485.895	1214	74.864.171.360	50.973.982.797	<b>125.838.154.157</b>
2.02 5	6.583.075	1214	89.809.067.110	61.168.779.356	<b>150.977.846.466</b>

# Ley 4<sup>ta</sup> de 1992



**“ARTÍCULO 2º.-** Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: (...):

*h. La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;*

*i. La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;*

*j. El **nivel de los cargos**, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;*

*k. El establecimiento de **rangos de remuneración** para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral; (...)*

**ARTÍCULO 3º.-** El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y **la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos.**”

**ARTÍCULO 10.-** Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y **no creará derechos adquiridos.**



# TABLA DE ASIGNACIONES BASICAS SENA - 2020



GRADO	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL
1	5.861.336	4.725.157	3.699.893	2.798.215	1.952.570
2	6.165.167	5.096.914	4.181.011	2.975.060	2.370.926
3	6.392.791	5.508.318	4.424.008	3.315.290	2.608.222
4	6.781.683	6.036.753	4.647.420		2.905.958
5	7.588.874	6.452.569	5.061.794		
6	7.863.293		5.345.941		
7	8.016.143		5.556.566		
8	8.311.613		5.868.650		
9	9.699.272		6.502.760		
10	10.653.109		7.059.418		
11	13.685.492				

## TABLA DE ASIGNACIONES BASICAS INSTRUCTORES SENA 2020

GRADO	ASIGNACION BÁSICA	GRADO	ASIGNACION BÁSICA
1	2.906.224	11	3.904.854
2	3.006.645	12	3.977 .188
3	3.109.184	13	4.083.763
4	3.212.272	14	4.152.427
5	3.311.595	15	4.253 .308
6	3.389 .599	16	4 .356.683
7	3.493 .611	17	4.451 .349
8	3.591.487	18	4.576.400
9	3.696.888	19	4.681.781
10	3.802.950	20	4.865.694



## COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE CARGOS

CARGO	REQUISITOS	ASIGNACION BASICA	PRIMA DE LOCALIZ 2020	TOTAL ASIGNACION MENSUAL
<b>Auxiliar Grado 01 con Prima de Localización</b>	Título de Bachiller y 20 meses de experiencia laboral	1.952.570	2.645.589	<b>4.598.159</b>
<b>Profesional Grado 03 resto del país</b>	Título Profesional, Especialización y 12 meses de experiencia profesional	4.424.008	-	<b>4.424.008</b>
<b>Auxiliar Grado 01 con Prima de Localización</b>	Título de Bachiller y 20 meses de experiencia laboral	1.952.570	2.645.589	<b>4.598.159</b>
<b>Instructor Gr. 18 resto del país</b>	Con ascensos anuales en el SSEMI	4.576.400	-	<b>4.576.400</b>
<b>Técnico Grado 01 con Prima de Localización</b>	Título de Técnico Profesional y 6 meses de experiencia relacionada	2.798.215	2.645.589	<b>5.443.804</b>
<b>Asesor Grado 02 resto del país</b>	Título Profesional, Especialización y 6 meses de experiencia	5.096.914	-	<b>5.096.914</b>
<b>Técnico Grado 03 con Prima de Localización</b>	Título de Tecnólogo, Especialización tecnológica y 12 meses de experiencia	3.315.290	2.645.589	<b>5.960.879</b>
<b>Subdirector de Centro G 02 resto del país</b>	Título Profesional Universitario, Maestría y 40 meses expere. Profes.	6.165.167	-	<b>6.165.167</b>
<b>Profesional G 8 con Prima de Localización</b>	Título Profesional, Especialización y 27 meses de experiencia profesional	5.868.650	2.645.589	<b>8.514.239</b>
<b>Director Regional G 8 resto del país</b>	Título Profesional, 3 años de experie. directiva y vínculo con región.	8.311.613	-	<b>8.311.613</b>

## COMPARATIVO DE COSTOS AUXILIAR 01 CON DIRECTOR GENERAL



Año	Asignación Básica con incremento anual 3%		Más Prima de Localización para Auxiliar 01 con incremento del 20% anual	TOTAL Asignación Básica mensual del Auxiliar 01 con Prima de Localización
	Director General	Auxiliar 01		
2020	13.685.492	1.952.570	2.645.589	4.598.159
2021	14.096.057	2.011.147	3.174.707	5.185.854
2022	14.518.938	2.071.482	3.809.648	5.881.130
2023	14.954.507	2.133.626	4.571.578	6.705.204
2024	15.403.142	2.197.635	5.485.893	7.683.528
2025	15.865.236	2.263.564	6.583.072	8.846.636
2026	16.341.193	2.331.471	7.899.686	10.231.157
2027	16.831.429	2.401.415	9.479.624	11.881.039
2028	17.336.372	2.473.457	11.375.548	13.849.006
2029	17.856.463	2.547.661	13.650.658	16.198.319
2030	<b>18.392.157</b>	2.624.091	16.380.790	<b>19.004.881</b>

## COMPARATIVO DE COSTOS PROFESIONAL 10 CON DIRECTOR GENERAL



Año	Asignación Básica con incremento anual 3%		Más prima de Localización para Profesional 10 con incremento del 20% anual	TOTAL Asignación Básica mensual de Profesional 10 con Prima de Localización
	Director General	Profesional 10		
2020	13.685.492	7.059.418	2.645.589	9.705.007
2021	14.096.057	7.271.201	3.174.707	10.445.907
2022	14.518.938	7.489.337	3.809.648	11.298.985
2023	14.954.507	7.714.017	4.571.578	12.285.594
2024	15.403.142	7.945.437	5.485.893	13.431.331
2025	15.865.236	8.183.800	6.583.072	14.766.872
2026	<b>16.341.193</b>	8.429.314	7.899.686	<b>16.329.001</b>
2027	<b>16.831.429</b>	8.682.194	9.479.624	<b>18.161.817</b>
2028	<b>17.336.372</b>	8.942.660	11.375.548	<b>20.318.208</b>
2029	<b>17.856.463</b>	9.210.939	13.650.658	<b>22.861.597</b>
2030	<b>18.392.157</b>	9.487.267	16.380.790	<b>25.868.057</b>



## Sentencias:

T-102 de 1995

T-276 de 1.997

C-710 de 1.999

C-815 de 1.999

C-1433 de 2000

C- 1064 de 2001

C-551 de 2003

C-1017 de 2003

C-931 de 2004

C-911 de 2012

## *ESCENARIOS:*

- Continuar incrementando la Prima de Localización con el 20%
- Tomar el valor de la Prima de Localización del 2020 (\$2.645.589) y continuar reajustándola cada año con el mismo % del IPC o de la asignación básica mensual.
- Reliquidar la Prima de Localización con el valor equivalente a los ajustes reales del salario desde 1980 (entre \$269.618 a \$425.295) – **Sólo por sentencia judicial.**
- En ningún escenario se contempla devolución de sumas recibidas por los servidores públicos – BUENA FE.



# GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
Línea de atención al empresario: 018000 910682



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



## EL COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACION DE SALARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Hace constar la siguiente información relacionada con la Prima de Localización del SENA:

- a. Las normas vigentes que regulan el reconocimiento y pago de la Prima de Localización del SENA son el Artículo 20 del Decreto 1014 de 1978, adicionado por el Artículo 8° del Decreto 415 de 1979.
- b. El valor de la prima de localización que ha pagado el SENA a los empleados desde que fue creada, hasta la fecha es la siguiente, con el incremento del 20% anual que establece el Artículo 8° del Decreto 415 de 1979:

AÑO	PRIMA DE LOCALIZACION 20%
1978	1.250
1979	1.500
1980	1.800
1981	2.160
1982	2.592
1983	3.110
1984	3.732
1985	4.479
1986	5.375
1987	6.450
1988	7.740
1989	9.288
1990	11.145
1991	13.374
1992	16.049
1993	19.259
1994	23.111
1995	27.733
1996	33.279
1997	39.935
1998	47.922
1999	57.506
2000	69.008
2001	82.809
2002	99.371

2003	119.245
2004	143.094
2005	171.713
2006	206.056
2007	247.267
2008	296.720
2009	356.064
2010	427.277
2011	512.733
2012	615.279
2013	738.335
2014	886.002
2015	1.063.203
2016	1.275.843
2017	1.531.012
2018	1.837.214
2019	2.204.657
2020	2.645.589

c. El SENA le paga la prima de localización mencionada en este documento a los siguientes empleados (información con corte a 31 de enero de 2020):

NIVEL	No DE CARGOS
ASISTENCIAL	59
DIRECTIVO	21
INSTRUCTOR	786
PROFESIONAL	231
TECNICO	115
TRAB. OFICIAL*	2
<b>Total General</b>	<b>1.214</b>

d. El Valor anual de la prima de localización mencionada en este documento, para los empleados anotados en el cuadro anterior, es el siguiente:

PRIMA DE LOCALIZACION 2020				
NIVEL	No DE CARGOS	VALOR PRIMA DE LOCALIZACION	VALOR FACTOR PRESTACIONAL	TOTAL ANUAL PRIMA DE LOCALIZACION
ASISTENCIAL	59	1.751.204.207	1.183.776.116	2.934.980.324
DIRECTIVO	21	624.623.799	427.489.480	1.052.113.279
INSTRUCTOR	786	23.320.611.291	15.913.479.779	39.234.091.070
PROFESIONAL	231	6.862.925.019	4.667.436.026	11.530.361.045

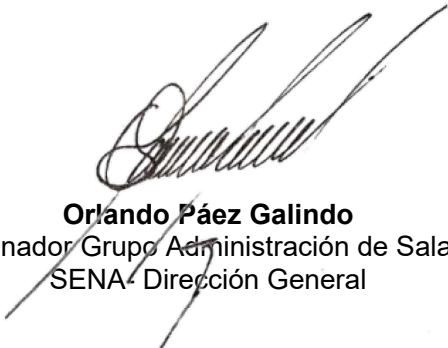


<b>TECNICO</b>	115	3.417.308.603	2.350.234.839	5.767.543.442
<b>TRAB. OFIC.</b>	2	59.437.589	39.953.873	99.391.462
<b>Total General</b>	<b>1214</b>	<b>36.036.110.508</b>	<b>24.582.370.114</b>	<b>60.618.480.622</b>

e. El valor de la prima de localización para los 10 años siguientes incrementada cada año con el 20%, es el que aparece en la segunda columna titulada "VALOR PRIMA DE LOCALIZACION", y su costo total anual proyectado es el que aparece en la última columna denominada "TOTAL ANUAL PRIMA DE LOCALIZACION":

PROYECCION PRIMA DE LOCALIZACION SENA 2020 A 2029					
AÑO	VALOR PRIMA DE LOCALIZACION	No DE CARGOS	VALOR PRIMA DE LOCALIZACION	VALOR FACTOR PRESTACIONAL	TOTAL ANUAL PRIMA DE LOCALIZACION
2.020	2.645.589	1214	36.036.110.508	24.582.370.114	60.618.480.622
2.021	3.174.708	1214	43.383.025.220	29.498.832.637	72.881.857.857
2.022	3.809.650	1214	52.031.691.742	35.398.599.164	87.430.290.906
2.023	4.571.580	1214	62.410.091.568	42.478.318.997	104.888.410.566
2.024	5.485.895	1214	74.864.171.360	50.973.982.797	125.838.154.157
2.025	6.583.075	1214	89.809.067.110	61.168.779.356	150.977.846.466
2.026	7.899.689	1214	107.742.942.010	73.402.535.227	181.145.477.237
2.027	9.479.627	1214	129.263.591.889	88.083.042.273	217.346.634.162
2.028	11.375.553	1214	155.088.371.745	105.699.650.727	260.788.022.473
2.029	13.650.663	1214	186.078.107.572	126.839.580.873	312.917.688.445

Se expide en Bogotá D.C. el 6 de Octubre de 2020.


  
**Orlando Páez Galindo**  
Coordinador Grupo Administración de Salarios  
SENA - Dirección General

Proyectó: Hernando A. Guerrero – Profesional Secretaría General



OnBase

Comunicación electrónica – Respuesta

Número de Radicación	9-2020-040553	
Fecha	07/10/2020 8:51:55 a. m.	
NIS	2020-01-199507	
Antecedente	7-2020-147281	
Asunto	RESPUESTA SOL	
Descripción del Asunto	RESPUESTA PETICION ¿ PRIMA DE LOCAL	
<b>Destinatario</b>		
Nombre Destinatario	ALEJANDRO GARCIA URDANETA	
Email Destinatario	ABOGADOGARCIAURDANETA@GMAIL.COM	
<b>Cuerpo</b>		
		
<b>Copias Internas</b>		
Dependencia Destinatario	12027	GRUPO DE ADMINISTRACION DE SALARIOS
Regional Destinatario	1	DIRECCION GENERAL
Funcionario Destinatario	SANDRA LILIANA GOMEZ SALAZAR	
Email Destinatario	SAGOMEZS@SENA.EDU.CO	
Dependencia Destinatario	12027	GRUPO DE ADMINISTRACION DE SALARIOS
Regional Destinatario	1	DIRECCION GENERAL
Funcionario Destinatario	ALICIA HERNANDEZ PIRAQUIVE	
Email Destinatario	AHERNANDEZ@SENA.EDU.CO	
<b>Copias Externas</b>		

**De:** Servicio al Ciudadano <[servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co)>

**Enviado el:** miércoles, 7 de octubre de 2020 8:54 a. m.

**Para:** [ABOGADOGARCIAURDANETA@GMAIL.COM](mailto:ABOGADOGARCIAURDANETA@GMAIL.COM)

**CC:** Servicio al Ciudadano <[servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co)>; grupodesalarios <[grupodesalarios@sena.edu.co](mailto:grupodesalarios@sena.edu.co)>; Sandra Liliana Gomez Salazar <[sagomezs@sena.edu.co](mailto:sagomezs@sena.edu.co)>; Alicia Hernandez Piraquive <[AHERNANDEZ@sena.edu.co](mailto:AHERNANDEZ@sena.edu.co)>

**Asunto:** Respuesta Ciudadana 92020040553 a PETICION No. 7-2020-147281

**Importancia:** Alta

Apreciado Alejandro Garcia Urdaneta

Se ha emitido respuesta a PETICION con radicado 7-2020-147281

<b>Radicado Respuesta</b>	92020040553
<b>N.I.S.</b>	2020-01-199507

1-2020-

Bogotá D.C.,

Señor

ALEJANDRO GARCÍA URDANETA

[abogadogarciaurdaneta@gmail.com](mailto:abogadogarciaurdaneta@gmail.com)

Bogotá D.C. – Colombia

Asunto: Respuesta petición – Prima de Localización.

Cordial saludo.

En respuesta a su comunicación del asunto radicada en el archivo de esta Dirección General el 2 de septiembre de 2020 con el No. 7-2020-147281, de manera atenta le respondo cada uno de sus solicitudes, con la siguiente información:

PREGUNTA 1. "Fuente constitucional y legal que sirven de causa a la prima de localización en el SENA desde su creación hasta la fecha (PRINCIPIO DE LEGALIDAD PÚBLICA)".

RESPUESTA SENA: Desde su creación, el SENA ha tenido disposiciones salariales específicas, que se traducen en: i) una nomenclatura propia de cargos; ii) una escala salarial propia y, iii) unas prestaciones sociales especiales para los servidores públicos de esta entidad.

El Decreto 2464 de 1970, denominado "Estatuto de Personal del SENA", dispuso en su artículo 6º que "Los cargos en el SENA se clasifican en grados, categorías y ramas, de acuerdo con las funciones inherentes a ellos, y teniendo en cuenta las calidades exigidas para su desempeño y la organización interna de la entidad", y en sus artículos 126 y siguientes señaló las prestaciones sociales especiales para esos cargos.

Posteriormente, el Gobierno Nacional, actuando en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 5a. de 1973, expidió el Decreto Ley 1014 de 1978, mediante el cual fija "el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos para los empleados públicos que desempeñan las funciones correspondientes a las distintas categorías de empleos del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se fijan reglas para el reconocimiento de sus prestaciones sociales y se dictan otras disposiciones".

Entre esas prestaciones sociales específicas para los servidores públicos del SENA, el Artículo 20 del Decreto 1014 de 1978, adicionado por el Artículo 8º del Decreto 415 de 1979, establece la Prima de localización, en los siguientes términos y condiciones:

- Decreto 1014 del 15 de junio de 1978:

“Artículo 20. Los empleados públicos que prestan sus servicios en el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento del Chocó, y en la región de Urabá donde existen sedes permanentes del SENA, percibirán una prima de mil doscientos cincuenta pesos (\$1.250.00) mensuales por concepto de ésta prestación. En ningún caso se podrán recibir viáticos y prima de localización simultáneamente.

Apartar del 1°.Enero de 1979, los empleados públicos que prestan sus servicios en los departamentos del Cesar y la Guajira o en Centros fijos de los Territorios Nacionales, recibirán ésta prestación.”

- Decreto 415 del 26 de febrero de 1979:

“Artículo 8: La prima de localización constituye parte integral de la asignación básica mensual de los empleados del Sena. En consecuencia, los empleados públicos que prestan sus servicios en el centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento del Chocó y en la región de Urabá donde existen sedes permanentes del SENA, en los Departamentos del Cesar y la Guajira o en centros fijos de los Territorios Nacionales, percibirán un prima de Un mil quinientos pesos (\$1.500.00) mensuales, por concepto de ésta prestación. En ningún caso se podrá recibir viáticos y primas de localización simultáneamente. Esta prima se incrementará en un veinte por ciento (20%) anualmente.”

En virtud del principio de legalidad que menciona en su pregunta, la prima de localización tiene las siguientes características legales de acuerdo con las normas transcritas:

- Es una suma fija mensual.
- Forma parte integral de la asignación básica mensual del cargo.
- Es factor salarial para la liquidación de otras prestaciones sociales.
- Se le paga solamente a los servidores públicos del SENA que prestan sus servicios de manera permanente en las sedes de la entidad ubicadas en:

- Buenaventura
- Barrancabermeja
- Departamento del Chocó
- Región de Urabá
- Departamento del Cesar
- Departamento de la Guajira
- Territorios Nacionales (Actuales Departamentos de Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada).

PREGUNTA 2. "Valor de la prima de localización que ha pagado el SENA a los empleados desde que fue creada, hasta la fecha".



RESPUESTA SENA: Anexo documento con la información solicitada.

PREGUNTA 3. "Empleados a los que el SENA le paga actualmente prima de localización y su valor anual".

RESPUESTA SENA: Anexo documento con la información solicitada.

PREGUNTA 4. "Presentación actualizada en Powerpoint utilizada por el SENA este año para explicarle a los empleados la prima de localización".

RESPUESTA SENA: Anexo a esta respuesta remito la presentación utilizada en el 2020 sobre el tema, en la que aparece la información oficial de la entidad.

PREGUNTA 5. "Valor de la prima de localización a 10 años incrementada con el 20%".

RESPUESTA SENA: Anexo documento con la información solicitada.

Cordial Saludo,

Orlando Páez Galindo  
Coordinador Grupo Administración de Salarios [opaezg@sena.edu.co](mailto:opaezg@sena.edu.co)  
Teléfono: 5461500 IP: 12694  
Calle 57 No. 8 – 69 Torre Sur Piso 2  
Dirección General – Bogotá

NIS.: 2020-01-199507

Atentamente,



### Grupo Administración De Documentos

[servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) –  
[grupoadmondocumentos@sena.edu.co](mailto:grupoadmondocumentos@sena.edu.co)  
5461500  
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)